

1. LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Concepto de Violencia de Género

Según el artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer» realizada en la Conferencia de Viena de 1993 de las Naciones Unidas, la violencia de género se define como: «Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que causa o es susceptible de causar a las mujeres daño o sufrimiento físico, psicológico o sexual, incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada»

La violencia de género existe prácticamente en todo el mundo, si bien varía la intensidad, las circunstancias y las formas de ejercerla.

La violencia contra las mujeres basada en la discriminación por el hecho de ser mujer constituye una violación de los derechos humanos más habituales de cuantas se cometen en las sociedades contemporáneas. Estos abusos que afectan a derechos fundamentales como la vida, la integridad física y mental o el derecho a la salud, entre otros, socavan el principio básico de igualdad entre mujeres y hombres.

Durante más de un siglo se ha producido en nuestra sociedad un proceso de concienciación social al respecto, que ha alcanzado una mayor visibilidad en los últimos años.

La importancia que actualmente se atribuye a este fenómeno ha permitido que la comunidad internacional, y en particular la Unión Europea, hayan reconocido que la violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y, por tanto, un obstáculo para el desarrollo de cualquier sociedad democrática.

No puede considerarse como una serie de agresiones aisladas que llevan a cabo algunos hombres por motivos personales. La causa no hay que buscarla en la víctima, la mujer que sufre la agresión. Se trata de patrones de carácter cultural y social perfectamente identificables, similares, precisamente porque tienen un marcado carácter cultural y social. No se trata de hechos aislados que llevan a cabo individuos aislados.

Lo primero que hay que hacer para luchar contra el maltrato es sacarlo a la luz. Asimismo hay que analizar las consecuencias psicológicas que este tipo de violencia acarrea a la mujer y a los hijos, de tal modo que podamos adoptar medidas eficaces de protección y rehabilitación de las víctimas.

Esta lacra social, debe ser combatida no solo con leyes, sino con una gran concienciación social y con la colaboración de equipos multidisciplinares especializados que apoyen a las víctimas y aborden el problema de forma global.

El término de violencia de género es el más utilizado no solo en nuestra legislación, sino que es el empleado por organismos de carácter internacional. Género hace referencia al rol desempeñado en la sociedad por cada uno de los sexos, a las relaciones de poder entre sexos.

La denominación de violencia de género se generalizó a partir de la IV Conferencia Mundial de Mujeres de Pekín, auspiciada por la ONU en 1995, siendo mundialmente aceptada. Con ella se pone de manifiesto que este tipo

de violencia lleva implícita una concepción de la mujer como ser inferior al hombre y por tanto supeditada y subordinada al mismo. Tiene a su favor el hecho de basarse en factores de carácter cultural y no puramente biológicos. La Constitución española en su artículo 9.2 establece la obligación de los poderes públicos de garantizar la igualdad real y efectiva, para lo cual deberá remover todos los obstáculos que la impidan o dificulten. Y entre los derechos fundamentales establecidos constitucionalmente figura un elenco íntimamente relacionado con la violencia contra las mujeres: la dignidad de la persona (artículo 10), el derecho a la no discriminación (artículo 14), el derecho a la vida y la integridad física y psíquica (artículo 15) y el derecho a la libertad y la seguridad (artículo 17).

La sociedad parte de un sistema de valores que asigna unos roles muy distintos a hombres y mujeres, si bien, no debemos confundir las diferencias biológica entre ambos sexos con las culturales. De ahí la diferencia terminológica entre sexo y género. El sexo hace referencia a la biología y el género a las características que cada cultura atribuye a un determinado sexo, comportamiento, actitudes, vestimenta.... Por tanto el género es un concepto cultural y varía de una sociedad a otra.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género utiliza esta terminología. En la Exposición de Motivos se dice que es el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad...que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser considerada por sus agresores carentes de derechos mínimos, de libertad, de respeto y capacidad de decisión.

En este sentido, la Ley Orgánica 1/2004, elaborada siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea y del Consejo de Europa, supuso un salto cuantitativo y cualitativo al proveer de una herramienta jurídica para combatir la violencia contra las mujeres, aunque, a diferencia de la ley navarra, circunscribía su ámbito de actuación al ámbito doméstico o de la pareja y ex pareja.

El artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004 sólo recoge un tipo de violencia de género, la que se da en las relaciones de pareja, noviazgo o matrimonio y hace referencia a los siguientes agresores: cónyuges, ex cónyuges, pareja o ex pareja (quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia). Deja por tanto, fuera de la Ley el resto de manifestaciones de la violencia de género, tales como prostitución forzada, acoso, matrimonios forzosos, homofobia...

El Convenio de Estambul

Posteriormente, el Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica, de 11 de mayo de 2011 (Convenio de Estambul) ratificado por el Estado Español y vigente en nuestro país desde el 1 de agosto de 2014, reconoce esta violencia como una violación de los derechos humanos y como una forma de discriminación, considerando responsables a los Estados si no responden de manera adecuada, obligando a los firmantes a adaptar su legislación a las obligaciones contenidas en el Convenio.

La importancia del Convenio estriba en que supone el primer instrumento de carácter vinculante en el ámbito europeo en materia de violencia contra la mujer y la violencia doméstica, y es el tratado internacional de mayor alcance para hacer frente a esta grave violación de los derechos humanos, estableciendo una tolerancia cero con respecto a la violencia hacia la mujer.

La violencia contra la mujer se reconoce en el Convenio como una violación de los derechos humanos y como una forma de discriminación, considerando responsables a los Estados si no responden de manera adecuada.

Los fundamentos del Convenio son:

Prevenir la violencia, proteger a las víctimas y entablar acciones judiciales contra los agresores.

Sensibilizar y hacer un llamamiento a toda la sociedad, especialmente a los hombres y niños, para que cambien de actitud y rompan con una cultura de tolerancia y negación que perpetúa la desigualdad de género y la violencia que la causa.

Destacar la importancia de una actuación coordinada de todos los organismos y servicios oficiales pertinentes y la sociedad civil.

La recogida de datos estadísticos y de investigación sobre todas las formas de violencia contra la mujer.

El Convenio contempla como delito todas las formas de violencia contra la mujer: la violencia física, psicológica y sexual, incluida la violación; la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso, el aborto forzado y la esterilización forzada. Esto implica que los Estados deberán introducir en sus sistemas jurídicos estos delitos.

Los fundamentos y alcance del Convenio están acordes con la normativa y actuaciones llevadas a cabo por España en esta materia, pues entre las obligaciones a los Estados del Convenio de Estambul destacan algunas medidas ya consolidadas en nuestro país, como:

La formación de los distintos colectivos de profesionales que intervienen en las situaciones de violencia de género.

El servicio 016 de información y de asesoramiento jurídico en materia de violencia de género, gratuito y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

El diseño y permanente actualización de un sistema de información estadística de datos relativos a violencia de género.

La sensibilización de la ciudadanía y la prevención de la violencia de género mediante la realización de campañas de información y sensibilización.

La existencia de la obligación de denunciar de quienes por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, como lo son los distintos delitos de violencia contra la mujer.

Asegurar que las víctimas tengan acceso a medidas de protección especial.

La Violencia de Género y el Consejo de Europa

Para afrontar los retos de la lucha contra la violencia sobre las mujeres en el futuro, el Consejo de Europa en un informe elaborado en 2008, identificó una serie de elementos clave que, según los ponentes del grupo de trabajo que lo llevó a cabo, sustentan enfoques eficaces para combatir la violencia, que están interconectados y de los cuales deberían manar todas las acciones de los Gobiernos:

– Es esencial, para la erradicación de la violencia contra la mujer, comenzar con una posición que reconozca que esta violencia está basada en el género, que es el resultado de un serio desequilibrio de poder entre mujeres y hombres y que es un obstáculo para conseguir la igualdad de género.

Además, constituye una violación de los derechos humanos y los Estados tienen la obligación de ejercer la diligencia debida para prevenir, investigar y castigar todos los actos de violencia, sean estos perpetrados por el Estado o por personas privadas, y dar protección a las víctimas.

- Para que los esfuerzos para combatir todas las formas de violencia contra las mujeres tengan éxito, deben ser apoyados por la voluntad política al más alto nivel y asegurar que se asignan los suficientes recursos financieros y de otro tipo para proteger a las mujeres y asegurar la dotación de servicios asistenciales. La voluntad política al máximo nivel es necesaria también para asegurar que los Gobiernos jueguen un papel activo para enfrentarse a la violencia contra las mujeres y cambiar las actitudes que la estigmatizan, la legitiman y ayudan a perpetuarla.

- Es prioritario adquirir un enfoque integral, a largo plazo, multidisciplinar y coordinado entre todos los sectores, para combatir la violencia contra las mujeres, que reconozca el importante papel y experiencia que las asociaciones de mujeres tienen en la prestación de servicios. Una herramienta idónea para asegurar que se use semejante estrategia es un plan nacional de acción con un planteamiento integral para afrontar todas las formas de violencia contra las mujeres, que abarque legislación, políticas prácticas, sensibilización, formación y recogida de datos, con un organismo coordinador para evaluar su ejecución.

Mujeres de todas las edades siguen estando sometidas a muy diversas formas de violencia a manos de hombres. En todos los Estados miembros del Consejo de Europa, los familiares, compañeros de trabajo e incluso los desconocidos emplean la violencia para mantener el dominio masculino sobre las mujeres. A pesar de una atención pública cada vez mayor y de las promesas gubernamentales de erradicar esta lacra secular, la violencia contra la mujer sigue siendo generalizada.

La violencia contra la mujer es el resultado de un desequilibrio de poder entre mujeres y hombres. No se trata de malos tratos sufridos a nivel individual, sino que debe entenderse como una forma de imponer la subordinación de las mujeres. A lo largo de la historia, las relaciones de poder entre mujeres y hombres han sido desiguales, lo que ha dado como resultado el dominio masculino sobre las mujeres y una discriminación estructural generalizada contra ellas. En diversa medida, las normas culturales y sexuales patriarcales, las divisiones discriminatorias del poder y del trabajo y la dependencia económica de las mujeres siguen existiendo en la sociedad actual, tanto dentro como fuera de Europa. Pero la violencia contra la mujer no sólo es el resultado de estos factores, sino que también los refuerza.

Hay en Europa mujeres que son abofeteadas, pateadas, golpeadas, encerradas, acosadas sexual y psicológicamente, mutiladas genitalmente, obligadas a prostituirse y asesinadas por hombres de su entorno social inmediato pero también por funcionarios del Estado. De niñas, sufren abusos sexuales en la familia o en las escuelas, discriminación en sus opciones de escolarización o formación profesional, la mutilación de sus genitales o el matrimonio en contra de su voluntad. Cuando son adultas, sufren maltrato

económico y psicológico y abusos sexuales por parte de sus parejas y son acosadas o violadas por sus ex parejas o por desconocidos.

Cuando son ancianas, vuelven a sufrir maltrato económico y psicológico y abusos sexuales por parte de familiares o de los empleados de las residencias de ancianos, y se les priva de tomar sus propias decisiones.

Las distintas manifestaciones de la violencia contra la mujer existen en todos los niveles de la sociedad y en todos los Estados miembros del Consejo de Europa. Si bien es cierto que algunos factores, como el origen étnico, la religión, la posición económica, la clase, la orientación sexual y la discapacidad, determinan las diversas formas de violencia sufridas, la violencia contra la mujer no se limita a ninguna cultura, país ni religión en concreto.

Es su carácter universal lo que la convierte en una forma endémica de discriminación contra las mujeres.

Una visión de conjunto de los estudios de prevalencia sobre violencia de género realizados en Europa sugiere que, en todos los países, entre una cuarta y una quinta parte de todas las mujeres ha sufrido violencia física al menos una vez en su vida adulta y que más de una décima parte ha sufrido violencia sexual mediante el uso de la fuerza física. Las cifras para todas las formas de violencia, incluido el acoso, se elevan hasta el 45 %.

En torno al 12-15 % de todas las mujeres han tenido una relación de maltrato doméstico después de los 16 años y muchas más siguen sufriendo violencia física y sexual después de separarse de su agresor.

El Consejo de Europa, en su Recomendación (2002) del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la protección de la mujer contra la violencia, definió la violencia contra la mujer de forma que incluyera toda forma de violencia por razón de género, tanto si era cometida por familiares, por desconocidos de su ámbito social, por funcionarios o en un conflicto armado. Incluye, entre otras formas, la violencia en el ámbito familiar o doméstico, la violación por parte del cónyuge o pareja, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados y otras prácticas tradicionales dañinas para las mujeres, pero también la trata de mujeres para la explotación sexual y la violación de sus derechos humanos durante los conflictos armados.

Conforme a esta definición, la violencia contra la mujer debe entenderse como «todo acto de violencia por razón de género que cause o pueda causar daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, incluidas las amenazas de realizar tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto en la vida pública como en la privada».

Los estudios académicos, las opiniones de los médicos y los ejemplos de buenas prácticas analizados para este informe revelaron que para tratar el asunto adecuadamente es fundamental aplicar un enfoque integral de prevención y lucha contra toda forma de violencia sobre la mujer. Intentar resolver la violencia contra la mujer únicamente a través del sistema judicial

penal, sin cambios legislativos sustanciales, dará tan pocos resultados como la inversión en la infraestructura de apoyo.

Prevenir la violencia contra la mujer, procesar y castigar a los agresores, indemnizar a las víctimas por el dolor y la angustia sufridos y protegerlas de sufrir más daño forman parte de cualquier estrategia para combatir la violencia contra la mujer. Esto significa que los Estados miembros necesitan adoptar una amplia variedad de medidas en muy diversos ámbitos como parte de una estrategia integral, coordinada, multisectorial y a largo plazo para combatir todas las formas de violencia contra la mujer.

Es fundamental que el centro de tales medidas sean las necesidades de las mujeres y el respeto de sus elecciones. El objetivo de un enfoque integral para combatir la violencia contra la mujer debe ser un sistema de intervención eficaz y coordinado centrado en las necesidades de las víctimas. Dicha estrategia debe abarcar medidas dirigidas a proteger a las mujeres frente a más malos tratos, servicios que ofrezcan orientación, ayuda psicológica y una ayuda integral, así como recursos jurídicos eficaces, tanto penales como civiles, para todas las formas de violencia contra la mujer. Estas medidas son indispensables y deben estar disponibles de forma inmediata para todas las mujeres víctimas de violencia.

La importante función que las ONG de ayuda a las mujeres desempeñan para sensibilizar, provocar el cambio social y proporcionar servicios a las mujeres víctimas de violencia de género debe ser reconocida en todo intento por establecer una política integral. Debe establecerse una colaboración activa entre los organismos oficiales y las ONG. En muchos Estados miembros del Consejo de Europa, las ONG de ayuda a las mujeres llevan mucho tiempo proporcionando servicios de apoyo de mujer a mujer y abogando con éxito por el cambio. Es fundamental aprovechar su amplia experiencia implicándolas en el desarrollo de las estrategias y los procesos de toma de decisiones siempre que sea posible, así como proporcionando un marco jurídico y económico que garantice su independencia y la continuidad de sus servicios.

Las raíces de la violencia de género y las actitudes y comportamientos predominantes deben tratarse y atajarse a través de la educación, la sensibilización y la formación. Sin cambios significativos en las actitudes culturales, sociales y morales de la sociedad, los hombres seguirán recurriendo a la violencia para controlar a las mujeres.

Debe infundirse en las mujeres que sufren malos tratos el sentimiento de confianza en el sistema judicial, y se les deberá proporcionar información sobre sus derechos para que puedan buscar ayuda. Esto sólo puede lograrse a través de una importante reforma del sistema y de la formación de los profesionales que lo forman.

Las medidas jurídicas deben ir acompañadas de servicios especializados que den a las víctimas instrumentos para actuar y las ayuden a tomar decisiones de forma autónoma. Dichos servicios deben contar con el personal, los

equipos, la formación y la accesibilidad suficientes, lo que significa que deben contar también con los fondos suficientes.

Además, es necesario hacer respetar los derechos sociales y económicos de la mujer, incluidos el derecho al trabajo, a la ayuda económica, a una vivienda asequible y, en el caso de mujeres inmigrantes o refugiadas, el derecho a un permiso de residencia independiente que les permita vivir sin depender de sus esposos o familias.

Este enfoque integral no puede garantizarse a menos que se hayan comprendido y analizado las características específicas de la violencia contra la mujer. La recogida de datos sobre todas las formas de violencia contra la mujer y el efecto de las distintas medidas para combatirlas es fundamental para las estrategias de información y el desarrollo de políticas.

Para que los esfuerzos por combatir la violencia contra la mujer tengan éxito, el conocimiento a fondo de las necesidades de las mujeres que sufren violencia de género debe ir acompañado de voluntad política al más alto nivel, y que esta se traduzca en una asignación de recursos que permita un enfoque holístico y multidisciplinar.

Para ello es necesaria una financiación continuada a través de los presupuestos nacionales de los Estados; no basta con un fondo especial. Los presupuestos nacionales deben evaluarse desde el punto de vista del género, ya que afectan de forma diferente a hombres y mujeres: son un reflejo de sus diferencias de posición social y económica. El desarrollo de herramientas para elaborar presupuestos sensibles al género es fundamental para que los Estados puedan medir la rentabilidad de su trabajo e identificar cómo y hasta qué punto se están asignando los recursos para atajar la violencia contra la mujer. Para garantizar que los Estados se hacen cargo de sus responsabilidades de diligencia debida, toda financiación descentralizada a las autoridades locales y regionales debe someterse a una inspección y unos informes exhaustivos.

La legislación de la Violencia de Género en Navarra

Con posterioridad a la Ley Orgánica, se han publicado distintas leyes autonómicas que regulan esta materia en el ámbito de las Comunidades Autónomas, respetando los principios recogidos en la Ley nacional.

En 2002 entró en vigor en Navarra una de las primeras leyes específicas contra la violencia hacia las mujeres promulgadas en España, la Ley Foral 22/2002, de 2 de julio, para la adopción de medidas integrales contra la violencia sexista.

Esta ley foral permitió articular los esfuerzos de las instituciones navarras frente a la violencia contra las mujeres durante más de once años. Durante ese periodo se pusieron en marcha diferentes medidas que abarcan ámbitos de la violencia contra las mujeres como la investigación, prevención, información y atención, protección y mejora del acceso a la justicia de mujeres víctimas, así como procesos de trabajo con los agresores.

En este contexto fue elaborado y aprobado un Acuerdo interinstitucional para la coordinación efectiva en la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, que fue actualizado en 2010 y cuyo objetivo fue lograr la máxima y mejor coordinación entre las instituciones implicadas en la prevención de la violencia contra las mujeres y la asistencia y protección a las víctimas derivadas de ella, así como el establecimiento de pautas de actuación homogéneas en toda la Comunidad Foral de Navarra destinadas a garantizar la atención de calidad en los ámbitos sanitario, policial, judicial y social, así como una labor preventiva a través de medidas educativas y de sensibilización.

Sin embargo, el tiempo transcurrido desde la aprobación de dicha norma y la creciente sensibilización de nuestra sociedad hacen necesaria una importante actualización de la citada normativa.

Por ello la Comunidad Foral de Navarra ha aprobado la LEY FORAL 14/2015, DE 10 DE ABRIL, para actuar contra la Violencia hacia las Mujeres.

La ley foral se estructura en diez títulos, dos disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

En el título I, denominado disposiciones generales, se establece el objeto y el ámbito de aplicación. La ley foral tiene como objeto la actuación frente a la violencia contra las mujeres en la Comunidad Foral de Navarra, a través de la adopción de medidas integrales en los ámbitos de la investigación, información, prevención, sensibilización, detección, atención integral, protección, acceso a la justicia y reparación.

El ámbito subjetivo de aplicación de la ley foral abarca a todas las mujeres que vivan o trabajen en Navarra y sufran cualquiera de las formas de violencia descritas, así como las que se hallen de forma circunstancial en la Comunidad Foral de Navarra cuando suceda la situación de violencia respetando las competencias atribuidas a otras administraciones.

En vista de que las situaciones de violencia contra las mujeres afectan también a las personas menores que se encuentran en el entorno familiar, esta ley foral, siguiendo los convenios internacionales en la materia, las considera víctimas directas de esta violencia y las protege no sólo en cuanto a la tutela de sus derechos, sino también a su atención y protección efectiva.

Dicha norma define, por otra parte, el concepto de violencia contra las mujeres en los términos más amplios, incluyendo los daños o sufrimientos de naturaleza física, psicológica, sexual o económica, incluidas las amenazas, intimidaciones y coacciones o la privación arbitraria de la libertad, en la vida pública o privada. Así el artículo 3.3 establece las siguientes definiciones:

- a) Violencia física: cualquier acto violento contra el cuerpo de la mujer, con resultado o riesgo de producir lesión física o daño.
- b) Violencia psicológica: cualquier conducta, verbal o no verbal, como las amenazas, las coacciones, las humillaciones o vejaciones, la exigencia de

sumisión, el acoso, la coerción o los insultos, que produzcan en la mujer algún tipo de sufrimiento, desvalorización, aislamiento o limitaciones de su ámbito de libertad.

c) Violencia económica: la privación intencionada, y no justificada legalmente, de recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijas e hijos o la discriminación en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la convivencia de pareja.

d) Violencia sexual: cualquier acto de naturaleza sexual no consentido, en el que medie violencia, intimidación, prevalencia o manipulación emocional, incluida la exhibición, la observación y la imposición de relaciones sexuales.

A fin de proteger a las mujeres de dicha violencia, se incluyen como manifestaciones de la misma las siguientes:

a) La violencia en la pareja o ex pareja: la violencia física, psicológica, económica o sexual ejercida contra una mujer por el hombre que es o ha sido su cónyuge o con el que mantiene o ha mantenido relaciones similares de afectividad, con o sin convivencia, incluida su repercusión en los niños y las niñas que conviven en el entorno violento.

b) Las diferentes manifestaciones de la violencia sexual: la violencia sexual contra mujeres y niñas incluye la agresión sexual, el abuso sexual, el acoso sexual en el ámbito laboral o educativo y el abuso sexual cometido en las esferas familiar, comunitaria, educativa, laboral, así como en el espacio público.

c) El feminicidio: los homicidios cometidos en el ámbito de la pareja o ex pareja, así como otros crímenes que revelan que la base de la violencia es la discriminación por motivos de género, entendiéndose por tales el asesinato vinculado a la violencia sexual, el asesinato en el ámbito de la prostitución y la trata de mujeres, los asesinatos por motivos de honor, el infanticidio de niñas y las muertes por motivos de dote.

d) La trata de mujeres y niñas: la captación, transporte, traslado, acogimiento o recepción de mujeres o niñas, incluido el intercambio o la transferencia de control sobre estas personas, por medio de amenazas o uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o situación de vulnerabilidad, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que posea el control sobre las mujeres o niñas, con la finalidad de explotación sexual, laboral o matrimonio servil.

e) Explotación sexual: la obtención de beneficios financieros o de otra índole por la participación de mujeres y niñas mediante la utilización de violencia, la intimidación, el engaño o el abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima en el ejercicio de la prostitución, la servidumbre sexual u otros tipos de servicios sexuales, incluidos actos pornográficos o la producción de material pornográfico.

f) Matrimonio a edad temprana, matrimonio concertado o forzado: un matrimonio en el que no ha existido un consentimiento libre y pleno para su celebración, bien porque ha sido fruto de un acuerdo entre terceras personas, ajeno a la voluntad de la mujer, bien porque se celebra bajo condiciones de intimidación o violencia o porque no se ha alcanzado la edad prevista legalmente para otorgar dicho consentimiento.

g) Mutilación genital femenina: cualquier procedimiento que implique o pueda implicar una eliminación total o parcial de los genitales femeninos o

produzca lesiones en los mismos, aunque exista consentimiento expreso o tácito de la mujer o la niña.

h) Cualquier otra forma de violencia que lesione o sea susceptible de lesionar la dignidad, la integridad o la libertad de las mujeres que se halle prevista en los tratados internacionales, en el Código Penal español o en la normativa estatal o foral.

Se recoge de manera expresa el término Superviviente definido como las víctimas de violencia de género que han emprendido un proceso de recuperación a fin de superar el proceso de violencia sufrida.

Especialmente importante son los principios que informan esta ley foral, ya que constituyen la verdadera esencia en que se basa el contenido de la Ley Foral. Así recoge como principios rectores:

a) Respeto, protección y promoción de los derechos humanos: la actuación institucional y profesional frente a la violencia contra las mujeres por motivo de género se orientará a respetar, proteger y promover los derechos humanos de las mujeres.

b) Principio de "debida diligencia": la respuesta ante la violencia contra las mujeres se extenderá a todas las esferas de la responsabilidad institucional (prevención, protección, asistencia, reparación a las víctimas y promoción de la justicia) y estará encaminada a garantizar que los derechos de las mujeres se hagan realidad.

c) Enfoque de género y prohibición expresa de la mediación: la respuesta ante la violencia contra las mujeres se fundamentará en la comprensión de los estereotipos y las relaciones de género, sus raíces y sus consecuencias. La mediación entre víctima y agresor está expresamente prohibida en los casos de violencia contra las mujeres, tal y como se dispone en la normativa básica de aplicación.

d) Prohibición de discriminación: las instituciones públicas garantizarán que las medidas previstas en esta ley foral se aplican sin discriminación alguna basada en el origen étnico, la lengua, la religión, las opiniones políticas o cualquier otra opinión, el origen nacional o social, la pertenencia a una minoría nacional, la capacidad económica, la orientación sexual, la identidad de género, la edad, el estado de salud, la discapacidad, el estado civil, el estatus de migrante o la situación administrativa de residencia.

e) Atención a la discriminación múltiple: la respuesta institucional tendrá en especial consideración a las mujeres víctimas de la violencia contra las mujeres con otros factores añadidos de discriminación, tales como la edad, la clase social, la nacionalidad, la etnia, la discapacidad, la situación administrativa de residencia en el caso de mujeres migrantes u otras circunstancias que implican posiciones más desventajosas de determinados sectores de mujeres para el ejercicio efectivo de los derechos.

f) Respuesta integral y coordinación: la respuesta institucional reconoce que la violencia contra las mujeres es un problema multifactorial y que las necesidades de las mujeres víctimas abarcan ámbitos diferenciados de la política pública. En consecuencia, la respuesta institucional será integral y fomentará la coordinación y el trabajo en red entre instancias.

g) Respeto y no revictimización: la respuesta institucional establecerá mecanismos para asegurar que se trata con respeto a las víctimas y se evita la victimización secundaria; se garantizará que las medidas se dirigen a lograr la autonomía y libertad de las supervivientes y que se responde a sus principales necesidades, incluidas las de los hijos e hijas de las víctimas.

h) Responsabilidad: las instituciones públicas establecerán procesos de formación para garantizar que quienes tienen la responsabilidad de asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres actúan adecuadamente. Así mismo, se promoverá la exigencia de responsabilidades para casos de falta de diligencia.

i) Participación: se fomentará la participación de las mujeres víctimas de violencia y de las organizaciones de mujeres en el diseño y evaluación de los servicios y las políticas públicas frente a la violencia contra las mujeres así como de las asociaciones de discapacidad y otros colectivos vulnerables con problemática específica en la materia.

El título II está dedicado a la investigación y a la recogida de información. En el mismo se regulan la elaboración e impulso de estudios y trabajos de investigación sobre las causas, características, extensión y consecuencias de la violencia contra las mujeres, así como la evaluación de las medidas aplicadas para su prevención y erradicación.

Así mismo, se contempla la recopilación de información periódica de datos estadísticos desagregados que permitan conocer y afrontar las formas de violencia contra las mujeres. En igual sentido, se prevé la actualización de un mapa de recursos de atención y protección frente a la violencia contra las mujeres y la elaboración de encuestas sobre la evaluación de los servicios públicos.

El título III, prevención y sensibilización, tiene como objeto la adopción, por un lado, de medidas encaminadas a la prevención en el ámbito educativo y por otro, la puesta en marcha de medidas de sensibilización y de información.

En el ámbito educativo se disponen medidas en materia de formación del profesorado, así como de adaptación de los currículos educativos y materiales y de directrices en planes y proyectos educativos. En igual sentido, se contempla la escolarización inmediata de niños y niñas que se vean afectados por cambios de centro derivados de situaciones de violencia contra las mujeres y se establece prioridad de los derechos de la víctima por encima de los del agresor en los casos de convivencia en los centros educativos.

Por otro lado, se aborda la sensibilización social y la información a través de campañas y acciones formativas y se hace referencia al papel que deben cumplir los medios de comunicación y la publicidad en la erradicación de los estereotipos que conforman el contexto de la violencia contra las mujeres.

Dentro del título IV, correspondiente a la detección y atención de la violencia contra las mujeres, se aborda el desarrollo de las acciones necesarias para detectar e identificar situaciones de riesgo o existencia de violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones.

Se configuran los servicios públicos sanitarios y de servicios sociales como recursos clave para la detección y la atención y se prevé la elaboración, a tal efecto, de estrategias de detección y atención a mujeres víctimas de violencia, planes y programas de formación a profesionales, así como protocolos de atención y derivación y registros de casos.

El título V recoge los recursos y servicios de atención y recuperación a fin de prestar una atención integral encaminada a la completa recuperación de las mujeres que han padecido alguna de las manifestaciones de la violencia previstas en esta ley foral.

La atención integral comprende información y orientación a las mujeres sobre sus derechos y los re-cursos existentes, la atención a la salud física y mental como vía para paliar las secuelas de la violencia, así como la atención a las necesidades económicas, laborales, de vivienda, educativas y sociales y alojamiento temporal seguro, en los casos en que proceda.

Se establecen unos principios rectores de aplicación a la atención y se regula el catálogo de recursos y servicios de la red de atención y recuperación, integrado por recursos generales de información y atención, servicios de recuperación y atención especializada y red de acogida y alojamiento temporal seguro.

El fomento de la inserción laboral a mujeres víctimas de violencia, la promoción de su autonomía económica y el acceso a la vivienda integran el contenido del título VI de la ley foral.

En él se recogen derechos laborales de las mujeres trabajadoras que están viviendo una situación de violencia y se establecen determinadas medidas para la inserción laboral de las mujeres víctimas, otorgando prioridad en las convocatorias de subvenciones del Servicio Navarro de Empleo para programas de formación y empleo; junto a ello, se establece un elenco de ayudas económicas a las que pueden acceder las víctimas de violencia. Finalmente, se detallan las medidas para facilitar el acceso a la vivienda.

El título VII, relativo a la atención policial y la protección efectiva, establece para la actuación policial los principios de atención inmediata, investigación exhaustiva y protección efectiva, siempre desde el respeto a las competencias en materia de seguridad atribuidas a las distintas administraciones por la legislación básica estatal y foral, pero estableciéndose mecanismos para la coordinación y colaboración efectiva entre las diferentes instituciones y ámbitos: estatal, foral y local.

En relación con el Cuerpo de la Policía Foral se contempla la especialización, la formación inicial y continuada de profesionales, la adopción de protocolos de actuación policial, la calidad de los espacios de atención a víctimas y la adopción de medidas para la protección efectiva de las víctimas de las distintas manifestaciones de la violencia ejercida hacia las mujeres.

Las mujeres que padezcan una situación de violencia de las previstas en esta norma tienen derecho a recibir de las Administraciones Públicas de Navarra un servicio de atención y protección policial, que realice las siguientes funciones:

- a) Atención inmediata y de calidad como cauce para la denuncia.
- b) Investigación exhaustiva de los hechos denunciados.
- c) Protección policial efectiva en situación de riesgo.

Las Administraciones Públicas de Navarra garantizarán este derecho a través de la Policía Foral y policías municipales, que, en coordinación y colaboración con la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, prestarán una atención

especializada a las mujeres víctimas de alguna de las formas de violencia que esta ley foral recoge.

De acuerdo con lo dispuesto en la legislación estatal básica de aplicación, deberán suscribirse acuerdos o protocolos de coordinación y colaboración entre el Gobierno de Navarra y la Delegación de Gobierno en Navarra, así como entre el Gobierno de Navarra y las entidades locales, a fin de coordinar las actuaciones policiales en materia de asistencia y protección efectiva de las víctimas de violencia, tanto en las áreas urbanas como en el medio rural.

La prestación de atención especializada policial a las mujeres víctimas incluirá al menos:

- a) Facilitar una respuesta policial con el mayor grado de sensibilidad, calidad, celeridad y eficacia, evitando las actuaciones que representen un incremento de la victimización y la duplicación o repetición de las intervenciones.
- b) Informar a las mujeres de forma clara y accesible sobre sus derechos y las vías para hacerlos valer.
- c) Asistir y proteger a las víctimas de la forma más rápida, adecuada y eficaz en situaciones de riesgo.
- d) Asegurar la coordinación y colaboración policial con los recursos de asistencia jurídica, social y psicológica.

En lo que a especialización y protocolos de actuación policial se dispone:

1. Los servicios de atención policial son los recursos especializados de la Policía que tienen como finalidad garantizar el derecho de las mujeres que se hallen en situaciones de violencia de género, así como a sus hijos e hijas dependientes, a la atención especializada, la protección y la seguridad ante dicha violencia.

2. La Administración foral garantizará que la Policía Foral de Navarra disponga de la adecuada formación inicial y continua en materia de violencia contra las mujeres y de la formación y capacitación específicas y permanentes en materia de prevención, asistencia y protección de las mujeres que sufren violencia.

Se establecerán cursos de formación continua no solo para la unidad especializada de la Policía Foral, sino también para todo el resto de unidades de la Policía Foral y de las Policías Locales que puedan tener relación con mujeres que han sufrido violencia.

6. La Administración de la Comunidad Foral promoverá, en coordinación con la Federación Navarra de Municipios y Concejos, la formación y la adopción de protocolos para la asistencia de las víctimas de la violencia contra las mujeres, en los Cuerpos de Policías Locales de la Comunidad Foral de Navarra.

7. En los acuerdos o protocolos de coordinación y colaboración suscritos entre el Gobierno de Navarra y la Delegación de Gobierno en Navarra, y el Gobierno de Navarra y las entidades locales, se garantizará la adecuada calidad de servicio prestado por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que actúan en la Comunidad Foral de Navarra y de las Policías Locales que colaboren con la Policía Foral.

Los protocolos garantizarán la inclusión de las mujeres víctimas en Navarra en los sistemas de protección de ámbito nacional y su empleo por la Policía Foral y las Policías Locales si procediera.

En cuanto a la calidad de los espacios de atención, la Ley Foral dispone que las dependencias policiales y otros espacios para la atención policial de las víctimas de la violencia contra las mujeres deben atenerse a los siguientes principios:

a) Se diseñarán espacios físicos individualizados en las comisarías en las que se acoja y asista a las mujeres víctimas de violencia y a testigos, a fin de evitar una posible victimización secundaria.

b) Las salas de espera, los lugares para el registro de denuncias y para cualquier otro tipo de intervención o de actuación policial deberán distinguirse y adaptarse a las necesidades particulares de cada situación, con objeto de garantizar en todo momento la confidencialidad y permitir la separación completa de la víctima y el agresor.

c) Se preverán lugares especialmente diseñados para menores acompañantes.

d) Cuando sea preciso trasladar a las víctimas y a menores acompañantes, deberá hacerse utilizando vehículos adecuados a tal fin.

En lo relativo a la investigación policial, se establece que La Administración de la Comunidad Foral deberá arbitrar todos los medios disponibles para las investigaciones, incluidas las técnicas más avanzadas, a disposición de la Policía Foral, a fin de verificar y acreditar los hechos que puedan constituir violencia contra las mujeres, siempre preservando la integridad e intimidad de las víctimas.

2. De forma periódica, se actualizarán los protocolos de la Policía Foral en el ámbito de la investigación de la violencia contra las mujeres, con el fin de mejorar las técnicas y actuaciones policiales para el esclarecimiento de dichos hechos.

Sobre la Protección Efectiva de las mujeres que sufren la violencia se dispone el siguiente régimen jurídico:

1. A partir de los informes de servicios públicos y de la información de las mujeres denunciantes, la Policía Foral o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según tengan protocolizado, efectuarán la valoración de la situación de riesgo. Con base en dicha valoración, la Policía Foral en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales diseñarán planes específicos de protección y sistemas de seguimiento y coordinación para garantizar la protección efectiva de las víctimas.

2. La protección debe asegurarse tanto por medios tecnológicos como por servicios policiales, así como por cualquier otro medio que asegure la protección de las mujeres y la eficacia de las medidas judiciales de protección.

Los objetivos de los dispositivos de protección destinados a las mujeres en riesgo o en situación de violencia de género son:

a) Facilitar la localización y la comunicación permanente.

b) Proporcionar una atención inmediata a distancia.

c) Facilitar la protección inmediata y adecuada ante situaciones de emergencia.

3. Las medidas de protección deben ir orientadas a garantizar la no repetición de la violencia y hacer posible que las mujeres vivan en condiciones de libertad y seguridad.

4. La Policía Foral en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deberá vigilar y controlar el cumplimiento exacto de las medidas acordadas por los órganos judiciales encaminadas a la protección de la víctima a través de la vigilancia de los imputados o condenados. Las Policías Locales de la Comunidad Foral de Navarra deberán colaborar con la Policía Foral para asegurar el cumplimiento de las medidas acordadas por los órganos judiciales.

5. Las unidades especializadas en atención, investigación y protección a las víctimas de la violencia contra las mujeres y las unidades encargadas de la prevención de la delincuencia y el mantenimiento de la seguridad pública en general actuarán de forma coordinada a fin de lograr una protección integral y efectiva de las mujeres posibles víctimas de violencia.

El título VIII, relativo a la asistencia jurídica especializada y el acceso a la justicia, garantiza la disposición de asistencia letrada a las víctimas de una manifestación de violencia contra las mujeres con carácter previo a la interposición de la denuncia, regulándose la prestación del servicio con una alta calidad profesional.

Así mismo, se prevé la posibilidad de apoyo a las mujeres víctimas en el ámbito judicial por parte de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, mediante su personación en los procedimientos penales iniciados en los casos más graves de violencia contra las mujeres.

La especialización y atención adecuada en el ámbito judicial se garantizan a través de la formación inicial y continua del personal de los juzgados de violencia sobre la mujer y de los equipos psicosociales de cualquier forma de violencia.

Finalmente, se establece la colaboración en la formación de la Fiscalía y la Judicatura, la adopción de medidas adecuadas en materia de equipamiento y medios materiales de los juzgados de violencia sobre la mujer y el derecho a intérprete que asegure la información y la comunicación en todas las fases del procedimiento judicial.

El título IX, reparación, contempla el derecho a la reparación de las mujeres víctimas tanto en su dimensión individual, poniendo los medios necesarios para lograr la completa recuperación, como colectiva a través de reconocimientos y homenajes públicos.

Por último, como novedad normativa, el título X consagra una serie de medidas para garantizar la aplicación de la ley foral mediante el compromiso de una formación profesional permanente de profesionales que intervienen en la atención, protección y justicia; la elaboración de un plan de acción de desarrollo general de la ley foral y planes sectoriales derivados de aquel; y el seguimiento anual del plan junto con una evaluación cuatrienal del impacto de las medidas.

Con dicho fin, se establece la necesidad de coordinar a todas las instituciones con competencias en materia de violencia contra las mujeres para asegurar un seguimiento de la aplicación de la ley foral, la elaboración de los planes de acción contra la violencia sobre las mujeres, la elaboración

del informe anual de seguimiento, así como la adecuación al plan de acción de las cuantías anuales presupuestarias y consignadas para su desarrollo en cada ejercicio.

La Organización de Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre, como día internacional de la No Violencia Contra la Mujer, como una forma de concienciar a la población.

2. LOS SUJETOS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: AGRESORES Y VÍCTIMAS

a) El maltratador

Si bien no existe un único tipo de maltratador y todos ellos tienen características que los hacen diferentes entre sí, existen una serie de elementos que tienden a ser comunes en casi todos los casos. A continuación se indican una serie de doce rasgos que suelen ser compartidos por la mayor parte de los maltratadores.

Suelen tener buena imagen pública. No es infrecuente que cuando se conocen casos de malos tratos surjan voces de sorpresa entre las personas que conocen al maltratador. Esto se debe a que fuera del hogar el o la maltratadora tiende a actuar con perfecta normalidad, no habiendo por lo general en su conducta signos visibles de hostilidad hacia su pareja y tratándola tanto a ella como al resto con cordialidad y afecto. Es en el hogar, en la vida privada, donde el individuo en cuestión manifiesta y descarga su agresividad.

Sentimientos de inferioridad y baja autoestima. Un denominador común en la mayor parte de maltratadores es la presencia de baja autoestima y de sentimientos de inferioridad respecto a sus semejantes. Dichos sentimientos de inferioridad provocan una profunda frustración que se puede transformar fácilmente en violencia.

Por otro lado, la frustración que produce ver las cosas desde la perspectiva de quien tiene la autoestima baja, en ciertos casos, lleva a expresar la ira a través de la violencia contra quien es más débil físicamente o contra quien está en una situación de vulnerabilidad por causas relacionadas con el contexto. Además, se busca un lugar seguro en el que ejercer esa violencia, y el ámbito doméstico suele serlo para el agresor, ya que ofrece intimidad, lejos de las miradas de quien se teme.

Motivación por el poder. Por norma general, el o la maltratadora tiende a tener una elevada necesidad de poder. Estos sujetos tienden a necesitar imponer las propias opiniones o que las cosas se hagan a su manera, al menos en círculos sociales pequeños, aquellos en los que pueden intentar hacerse respetar mediante la violencia (en vez de conseguirlo, en ocasiones causan miedo, algo muy diferente al respeto).

Debido en gran parte a los sentimientos de inferioridad antes mencionados o a la ausencia de control en diversos dominios vitales importantes para el agresor, el individuo en cuestión pueden desembocar en la necesidad de ejercer control y dominio sobre la pareja, a quien tienden a considerar inferior.

Internalizan estereotipos de género. La violencia de género recibe ese nombre debido a que la causa del ejercicio de la violencia está vinculada al sexo de la persona objeto de agresión. Por consiguiente, la mayor parte de

maltratadores utilizan como pretexto para la agresión los roles de género, utilizándolos para remarcar su papel y el de su pareja y castigando las conductas y pensamientos que se alejen de ello.

Así, la mujer ha de ser sumisa, cariñosa y dependiente mientras que el hombre ha de ser fuerte, dominante y estoico. Si uno de los dos no cumple dichos papeles aparece frustración y agresividad.

Bajo nivel de asertividad. Otro aspecto relevante en una gran cantidad de maltratadores es la ausencia de una capacidad de responder asertivamente a los diferentes problemas que les pueden ocurrir día a día. Así, los problemas y los cambios les frustran y suelen reaccionar de forma aversiva ante ellos. Defienden sus derechos de forma agresiva sin tener en cuenta los deseos de los otros y situando sus necesidades en primer lugar.

Relaciones de dependencia

Si bien no se cumple en todos los casos, es común que en la estructura de la personalidad del maltratador tienda a haber cierta dependencia del entorno. Dicha dependencia provoca miedo y cierta fijación ante la idea de ser abandonado, cosa que en el caso del maltratador se traduce en un aumento del control hacia la pareja, un elevado nivel de celos hacia otros posibles "competidores", el intento de aislarla y hacer que dependa del agresor/a e incluso la agresión física.

Inestabilidad emocional e impulsividad. Por norma general el maltratador tiende a tener un elevado nivel de neuroticismo. Esto quiere decir que tiene una emocionalidad lábil que puede pasar rápidamente de la alegría a la tristeza, o del afecto al desprecio. Esta falta de estabilidad facilita la frustración y la tensión interna, que junto a una elevada impulsividad y un pobre control de los impulsos puede desencadenar una agresión.

Egocentrismo. Un aspecto relevante que comparten la mayor parte de maltratadores es la tendencia a centrarse en sus propias necesidades y preocupaciones, ignorando las de los demás o las consecuencias que la propia conducta en los otros.

Celos y posesividad. El individuo que maltrata tiende a temer que la pareja le abandone o le ponga en evidencia, con lo que intenta evitar que se vea influenciada o atraída por sujetos externos que puedan alejarla de ella, reaccionando de forma violenta a supuestas interacciones con personas ajenas a la pareja al considerar que pueden arrebatársela.

La persona maltratada es considerada un elemento de su propiedad que debe permanecer fiel y cumplir sus designios. Se establecen conductas controladoras y se sesga la percepción en búsqueda de la confirmación de sus temores.

Niveles bajos de empatía. Uno de los aspectos más claramente visibles en los maltratadores es el poco nivel de empatía que manifiestan con sus víctimas. No suelen ponerse en el lugar del agredido o eligen voluntariamente ignorar su punto de vista, no teniendo en cuenta los efectos

psíquicos y/o emocionales que el maltrato tiene sobre la víctima más allá del control de su conducta.

Minimizan la violencia o culpabilizan a los demás. Otro factor frecuente a pesar de que no se da en todos los casos es el hecho de que el maltratador tiende a considerar la violencia ejercida como justificada, disminuir la importancia de sus efectos o situar la culpa en la actuación de la pareja o en otros factores como el alcohol o las drogas.

Capacidad de manipulación. Si bien no en todos los casos, a pesar de tener una capacidad de empatía muy reducida muchos maltratadores reincidentes posean una elevada capacidad de manipulación y sugestión. Si bien también depende de la situación y de la personalidad de la víctima, en algunos casos se ha manifestado la capacidad de convencerlas de que las conductas agresivas se han llevado a cabo por su bien, que son normales o incluso de que la agresión era merecida.

También pueden predisponer a la víctima a desconfiar de su entorno y alejarse de él poniéndola en malos términos con sus seres queridos, aislándola y haciendo que dependa en exclusiva del o la agresor/a

b) Las víctimas:

La mujer maltratada tampoco responde a un perfil de mujeres susceptible de recibir maltrato; ni son mujeres de estratos sociales bajos, ni son siempre mujeres dependientes económicamente de sus parejas, ni son mujeres de baja formación y escasa cualificación.

Es imprescindible entender que el ataque que realiza un maltratador es emocional, es decir, no ataca a través de la inteligencia, la cultura o el conocimiento de la mujer, sino a través de sus emociones. Por ello se plantea que cualquier mujer puede ser víctima de un maltratador si la aborda en un momento emocional oportuno.

Una mujer se convierte en mujer maltratada sin que apenas sea consciente de ello, porque en el maltrato hacia las mujeres por parte de sus parejas no comienza con golpes, sino que nace de forma sutil desde el comienzo de la relación, en circunstancias que no se consideran violentas y a las que no se presta atención.

Al principio de la relación los actos de invasión de la intimidad y decisiones personales de la mujer que realiza el hombre y los actos de control (disfrazados de protección) se entenderán como demostraciones de amor, pues gracias al romanticismo de cuento de hadas que la sociedad y los medios de comunicación nos han transmitido se espera que la mujer sea la princesa sumisa y delicada, que aguarda al príncipe azul (fuerte, seguro de sí mismo y gran protector) que la protegerá y la hará sentirse importante e imprescindible.

Ante los primeros signos de maltrato, la mujer entiende que esa situación es pasajera, que el hombre de su vida no es en realidad así, y por ello aguantará y esperará a qué cambie; pero no cambiará.

La espiral de violencia irá creciendo hasta convertirse en episodios de verdadero maltrato físico y psicológico hacia la mujer. Antes de que se produzca esta situación, si la víctima no ha actuado antes, la sociedad deberá intervenir para evitar llegar a situaciones extremas y no ser cómplices de la barbarie de la violencia ejercida sobre las mujeres.

Si bien en el caso de los maltratadores, sin intentar definir un perfil, se pueden plantear una serie de características de comportamiento que suelen ser comunes en su conducta, en el caso de las mujeres víctimas de la violencia de género es, más complicado establecer no ya un perfil sino plantear que características que suelen ser comunes en su conducta, ya que es muy difícil distinguir cuales de esas características son propias de la mujer (previas a la violencia sufrida) y cuales son consecuencia de la violencia.

Algunos de los caracteres adquiridos como consecuencia de ser víctima de la violencia de género pueden ser los siguientes:

Pérdida de la autoestima y se sienten degradadas.

Acepta el machismo de su pareja y asume su dependencia hacia él.

Miedo, estrés, crisis de ansiedad, depresiones, trastornos del sueño, alimenticios e irritabilidad.

Incomunicación y aislamiento.

Indecisión e inseguridad debido al bloqueo mental.

Culpabilización, vergüenza y temor.

No toma decisiones en su propia vida debido a su inseguridad.

Entre las reacciones de las mujeres frente a las agresiones pueden establecerse las siguientes:

El abuso psicológico que se produce dentro del contexto de la violencia género lleva al temor y a la debilitación de las víctimas.

El aislamiento de las víctimas lleva a una dependencia del agresor y a la aceptación de las acciones del agresor.

El temor y la pérdida personal refuerzan la dependencia emocional de la víctima hacia el agresor.

Además de las mujeres los hijos e hijas son víctimas de la violencia de género.

Los niños y niñas hijos e hijas de las mujeres víctimas de la violencia de género son víctimas directas de esta violencia y no han sido reconocidos como tales. Se les considera sólo víctimas directas cuando han sufrido las agresiones físicas conjuntamente con sus madres, y en el resto de los casos, se les considera a lo sumo víctimas indirectas, en la medida que presencien estas agresiones a las madres, cuando no se argumenta que la violencia de un hombre a una mujer no cuestiona su capacidad como padre.

Los niños y niñas son víctimas de la violencia de género que se ejerce hacia sus madres no sólo, que también, porque a veces se les agrede también a ellos físicamente, siendo víctimas de violencia física, sino porque siempre son víctimas de violencia psicológica y no sólo porque presencien las palizas o las agresiones a sus madres sino por el mero hecho de vivir en un entorno en donde esta violencia es una pauta de relación.

Viven en un entorno donde las relaciones violentas y el abuso de poder, que justifica, legitima y desencadena esa violencia como parte de las relaciones afectivas y personales son una pauta diaria. Internalizan un modelo negativo

de relación que daña su desarrollo. Ven y sufren a una madre maltratada, en vez de protectora. Ven y sufren un padre maltratador, en vez de protector. Entre los efectos de la violencia de género sobre los niños y niñas identificados en investigaciones realizadas se pueden destacar los siguientes:

Problemas de socialización: aislamiento social, dificultad para establecer relaciones personales, conductas agresivas o autoagresivas....

Problemas escolares: bajo rendimiento, problemas de atención y concentración, agresiones entre iguales (como víctimas y como agresores)...

Síntomas de estrés postraumático: trastornos del sueño, fobias, trastornos alimenticios, ansiedad, ataques de pánico...

Conductas regresivas.

Síntomas depresivos y de ansiedad.

Alteraciones de desarrollo afectivo: modelos de vinculación erróneos, en los que violencia y amor van unidos, manejo del poder sobre otros...

Internalización roles violentos o de género equivocados: cuidado con creer que los patrones de género se transmiten por el sexo. Hay niñas que reproducen patrones de agresión y niños de víctima.

Parentalización de los niños: asunción de roles adultos en un intento de proteger a sus madres.

Por último, la familia de la mujer que sufre violencia de género, especialmente los padres de la mujer, son también víctimas de la violencia ya que sufren junto a la hija y nietos/as todas las consecuencias de la violencia de género.

3. EL CICLO DE LA VIOLENCIA

La teoría del ciclo de la violencia, formulada por la antropóloga Leonor Walker, es muy útil para entender los comportamientos de algunas mujeres que sufren violencia por parte de sus parejas. Este ciclo ayuda a comprender, sobre todo, la vuelta de la víctima con su agresor, algo que puede provocar en los profesionales un cierto sentimiento de fracaso o incluso de "enfado" hacia la mujer que sufre violencia.

La violencia de género en la pareja se mantiene a lo largo del tiempo, realizándose muy generalmente de forma intermitente, alternando momento de tensión y violencia con otros de calma, tranquilidad e incluso afecto. Esta intermitencia o alternancia se caracteriza por seguir un ciclo con tres etapas:

Fase 1. Acumulación de tensión

Esta fase se caracteriza por cambios imprevistos y repentinos en el estado de ánimo, enfados ante cualquier problema en la convivencia, reacciones agresivas ante cualquier frustración o incomodidad... (la comida no está a su hora o a su gusto, ella no está cuando él la "necesita" para algo, los hijos e hijas hacen mucho ruido, El hombre está "muy sensible", todo le molesta y cada vez más tenso e irritado).

La mujer en esta fase intenta controlar la situación con comportamiento que anteriormente le han servido: es condescendiente con él, intenta satisfacer o incluso anticiparse a su deseo y caprichos, procura no hacer nada que le desagrade y hace todas las cosas que conoce para poder complacerlo. Tiende a minimizar los incidentes ("no fue para tanto", ("pudo haber sido peor"), a excusarlos o a justificarlos, a achacar la tensión a causas externas...

Esta fase puede mantenerse durante períodos de tiempo largos.

Fase 2. Explosión de la Violencia

Descarga de la tensión acumulada en la fase anterior, mediante un incidente agudo. Esta descarga puede adoptar distintas formas y grados de intensidad. No se debe caer en el error de pensar solamente en la agresión como forma de explosión o descarga, pudiéndose dar muchas formas activas o pasivas para esta fase (gritar, ignorarla, golpear muebles, amenazarla con abandonarla, no hablarle, etc.)

La motivación del maltratador es castigar los comportamientos de la mujer que él considera inadecuados desde su planteamiento de poder y desigualdad; el incidente agudo de violencia se detiene cuando el maltratador piensa que ella "ha aprendido la lección".

La mujer vive esta fase como que el enfado de él está fuera de control. Cuando finaliza esta fase de descarga de la violencia, la mujer que la sufre va a quedar en un estado de conmoción, no queriendo creer que le ha pasado, minimizando el ataque sufrido y las heridas recibidas e incluso negando la situación que acaba de ocurrir.

Fase 3. Luna de miel

Es una fase de manipulación afectiva que se caracteriza por la disminución de la tensión. Puede adoptar distintas formas: el maltratador puede pedir perdón y prometer no volver a ser violento, reconocer su culpa y plantear cambios (incluso mediante tratamiento), resurgimiento de la relación...

El maltratador ha ejercido el castigo en la fase de explosión ("necesario" para que ella se adapte a los comportamientos que él espera) pero no puede permitirse ejercer la violencia de forma continuada ya que la mujer tendería a conductas evasivas o de escape; por ello tras el castigo adopta conductas para manipularla afectivamente y así conseguir que permanezca en la relación.

La victimización de la mujer se hace más profunda, pues se estrecha la relación de dependencia mujer maltratador.

Si ella había tomado la decisión de dejar la relación, en esta fase abandonará la idea, ante el acoso emocional y afectivo de él. Las mujeres suelen ante esta "nueva" actitud del maltratador retirar los cargos, abandonar el tratamiento y tomar como real la esperanza de que todo cambiará.

Esta fase tiene una duración temporal limitada, pues no responde al arrepentimiento, sino a que el maltratador perciba que ya no hay riesgo para la permanencia de la relación; como continúa analizando la pareja desde la subjetividad del dominio y la desigualdad, pronto se iniciará otra fase de acumulación de la tensión y el ciclo se repetirá.

Si las personas que pretenden ayudar a la mujer que sufre violencia no conocen y comprenden el ciclo, éste puede acabar manipulándoles también: la mujer va a pedir ayuda generalmente tras una fase de explosión especialmente importante o dañina para ella, que la lleva a superar el miedo, la vergüenza, la sensación de fracaso vital que supone asumir que su pareja es violenta. Pero en el funcionamiento del ciclo de la violencia, tras esa fase de explosión va a aparecer la fase de "luna de miel": cuando el maltratador logra acceder a ella (personalmente, por teléfono, a través de los hijos e hijas o personas cercanas) se va a encontrar con un hombre arrepentido, que le suplica perdón, que jura que "nunca más" que le promete cambiar y/o ponerse en tratamiento, etc. Esta situación puede llevarla a renunciar a la ayuda que ha pedido. Si no se comprende el ciclo y se entiende que ha sido manipulada una vez más, tenderemos a culpabilizar a la mujer víctima de la violencia que sufre.

4. PROTOCOLO PARA LA VALORACIÓN POLICIAL DEL NIVEL DE RIESGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LAS VÍCTIMAS.

La Secretaría de Estado de Seguridad mediante Instrucción 7/2016 ha establecido un nuevo protocolo para la Valoración Policial del Nivel de Riesgo de Violencia de Género y de Gestión de la Seguridad de las Víctimas.

Policía Foral, está adherida al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de violencia de género (Sistema VioGén), sistema que permite entre otras prestaciones, establecer una valoración del riesgo de la víctima, la evolución del mismo, realizar un seguimiento de la situación de cada víctima así como compartir la información con todos los agentes policiales que participan en este sistema.

Así, siempre que se tenga conocimiento de un episodio de violencia de género, la actividad policial se dirigirá a determinar:

- a) Los factores referidos a la violencia sufrida por la víctima.
- b) Las relaciones mantenidas con el agresor.
- c) Los antecedentes del propio agresor y su entorno.
- d) Las circunstancias familiares, sociales, económicas y laborales de la víctima y del agresor.
- e) La retirada de denuncias, la reanudación de la convivencia y la renuncia de la víctima al estatuto de protección concedido.

Esta información es imprescindible para poder concretar el grado o nivel de riesgo de que se produzca una nueva agresión contra la víctima, así como para determinar las medidas policiales de protección que deben ser adoptadas, siempre de manera personalizada e individual.

En el desarrollo de estas actuaciones, todos los actores que conozcan o tengan acceso a esta información, deberán facilitarla con la mayor premura y precisión posibles, con objeto de que las medidas policiales de protección a adoptar resulten efectivas y adecuadas.

Con el fin de garantizar la seguridad de la víctima, la citada información será remitida a la Autoridad Judicial y, en su caso, al Ministerio Fiscal.

La valoración de la situación de riesgo de violencia contra la mujer (Valoración Policial del Riesgo, VPR) y su evolución (Valoración Policial de la Evolución del Riesgo, VPER) se realizará empleando los formularios normalizados aprobados al efecto por la Secretaría de Estado de Seguridad, y disponibles en el "Sistema de Seguimiento Integral en los casos de violencia de género (Sistema VioGén)"

ESTIMACIÓN INICIAL DE LA SITUACIÓN DE RIESGO.

- 1.1. La primera evaluación de la situación de riesgo de violencia la realizará el agente o agentes policiales que instruyan las diligencias y se ocupen de las investigaciones.
- 1.2. Se utilizará el formulario VPR, que contempla factores de riesgo de tipo histórico que, por haberse producido en el pasado, permiten realizar estimaciones futuras.
- 1.3. El formulario VPR se cumplimentará cuando se haya recopilado información suficiente y contrastada. Se aprovechará la instrucción de las diligencias para indagar en los factores con los distintos implicados: víctima, agresor, testigos, técnicos, facultativos, etc. Tratando de no efectuar preguntas directas sobre dichos factores, con la finalidad de evitar realizar indicaciones que conlleven desviaciones o sesgos en las respuestas. Este formulario será cumplimentado por los agentes policiales actuantes, en ningún caso por los implicados.
- 1.4. Si la instrucción de diligencias se va a dilatar en el tiempo, se realizará una primera valoración tan pronto como se haya tomado declaración a la víctima a efectos de activar con prontitud las medidas policiales de protección que sean pertinentes, y otra nueva VPR una vez recopilada toda la información y finalizadas las diligencias del atestado, procurando que entre ambas valoraciones transcurra el menor tiempo posible.
- 1.5. El Sistema VioGén asignará automáticamente uno de los siguientes niveles de riesgo: "no apreciado", "bajo", "medio", "alto" o "extremo", que podrá ser modificado por los agentes al alza si, atendiendo a los indicios que no se reflejen en los indicadores del sistema, consideran que resulta necesario para una mejor protección a las víctimas.
- 1.6. Los niveles de riesgo "bajo", "medio", "alto" y "extremo", implicarán que el caso permanezca en la situación de "activo" en el Sistema VioGén, excepto cuando exista una causa que lo impida o lo haga desaconsejable, como pudiera ser la muerte de la víctima o del agresor, su salida al extranjero, etc., en cuyo caso, se inactivará con independencia del nivel de riesgo que se determine. En el nivel de riesgo "no apreciado", los agentes pueden cambiar los casos a la situación de "inactivos", siempre que no tengan medidas judiciales de protección en vigor, en tal supuesto, permanecerán en activo. En cualquier momento un caso inactivo podrá reactivarse si se tiene conocimiento de nuevos hechos o circunstancias que así lo requieran.
- 1.7. La Unidad o Plantilla que tenga asignado el caso en el Sistema VioGén, se responsabilizará de mantener la información debidamente

actualizada y adecuará su actividad de protección con arreglo al nivel de riesgo obtenido en la valoración policial.

- 1 .8. El resultado de la valoración se comunicará a la Autoridad Judicial y, en su caso, al Ministerio Fiscal, en un informe que se incluirá en las diligencias y que recogerá la información sobre los principales factores de riesgo apreciados y otras circunstancias determinantes en la valoración. Cuando el nivel de riesgo resulte "medio", "alto" o "extremo", se informará a la víctima conforme al procedimiento que se establezca en correspondencia con lo dispuesto en la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito (en lenguaje claro, sencillo y accesible y con asistencia lingüística si fuese necesario).

2. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS.

- 2.1. Cada uno de los niveles de riesgo llevará aparejadas medidas policiales para gestionar la protección y la seguridad de las víctimas, de acuerdo con las medidas incluidas en los catálogos que serán de aplicación inmediata.

2.1. En todos los casos se informará a las víctimas de las medidas policiales de protección acordadas.

2.2. Igualmente, buscando la participación activa de la propia víctima, acorde con sus necesidades especiales de protección y de los menores que de ella dependan, se proporcionará un plan personalizado de seguridad, con medidas de autoprotección, que se obtendrá directamente del Sistema VioGén.

2.3. El traspaso de actuaciones entre diferentes Cuerpos o Unidades policiales se realizará a través del Sistema VioGén, a la mayor brevedad posible. Siendo obligatorio registrar en el citado sistema las acciones que se ejecuten y toda la información que se vaya generando, muy especialmente y con carácter inmediato, cuando se tenga conocimiento de hechos presuntamente delictivos, nuevas resoluciones judiciales o circunstancias que puedan afectar a la seguridad y protección de la víctima.

- 2.5, En correspondencia con el apartado anterior, la Unidad policial que pretenda traspasar las actuaciones a otra (reasignar el caso), antes de efectuar la correspondiente grabación, realizará las comprobaciones necesarias junto con la Unidad receptora, al objeto de confirmar que, efectivamente, es la que continuará con el seguimiento y protección de la víctima.

3. PRIMERA VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE RIESGO.

3.1 . La primera VPER se realizará, por regla general, una vez se celebre la vista judicial para resolver la solicitud de Orden de Protección, Alejamiento o la imposición de otras medidas cautelares o, en su caso, el correspondiente Juicio Rápido, utilizando el formulario disponible en el Sistema VioGén. Todo ello sin perjuicio de que, por suceder hechos que lo justifiquen, sea necesario efectuarla con anterioridad a las citadas actuaciones judiciales.

3.1. En todo caso, antes de llevar a cabo esta primera VPER, se contactará con la víctima y se le informará, entre otras cuestiones, de los recursos asistenciales de los que dispone y, en el caso de que se le haya otorgado Orden de Protección, Alejamiento u otras medidas cautelares, del alcance y efectos de la mismas, así como de su plan personalizado de seguridad.

3.2. En este punto, el Sistema VioGén volverá a asignar automáticamente uno de los siguientes niveles: "no apreciado", "bajo", "medio", "alto" o "extremo", que llevará aparejadas las correspondientes medidas policiales de protección, de aplicación inmediata y de las que se informará a la víctima. Este nivel de riesgo, igualmente podrá ser modificado por los agentes al alza si, atendiendo nuevos indicios que no se reflejen en los indicadores del sistema, considera que resulta necesario para una mejor protección a las víctimas.

3.3. El resultado de la VPER, se comunicará igualmente a la Autoridad Judicial y, en su caso, al Ministerio Fiscal, en un informe que se incluirá en las diligencias y que recogerá la información sobre los principales factores de riesgo apreciados y otras circunstancias determinantes en la valoración. Cuando el nivel de riesgo resulte "medio", "alto" o "extremo", se informará a la víctima conforme al procedimiento que se establezca en correspondencia con lo dispuesto en la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito (en lenguaje claro, sencillo y accesible y con asistencia lingüística si fuese necesario).

3.4. En caso de discrepancia entre las medidas de protección acordadas por la Autoridad Judicial y las que resulten de la valoración de riesgo policial, se aplicarán siempre las acordadas por ésta, informándola de inmediato sobre la discrepancia existente, para que acuerde lo que proceda. En tanto dicha Autoridad resuelva, se tendrá en cuenta lo siguiente:

Si se ha apreciado riesgo policial distinto a "no apreciado" pero la Autoridad Judicial ha desestimado la Orden de Alejamiento o de Protección, se seguirá facilitando la protección que corresponda a la víctima por su nivel policial de riesgo, y el caso permanecerá "activo" en el Sistema VioGén, hasta que el nivel de riesgo llegue a

"no apreciado" y se pase a "inactivo". Cuando, con carácter excepcional, se imposibilite el seguimiento de estas medidas policiales (la víctima renuncia a las medidas de protección, se traslada al extranjero, etc.), éstas se adaptarán a las circunstancias que se deriven de la nueva situación. Si en la valoración policial ha resultado riesgo "no apreciado" pero la Autoridad Judicial ha dictado una Orden de Alejamiento, de Protección u otras medidas cautelares personales o ha modificado las ya adoptadas, para garantizar la seguridad de la víctima, se mantendrá el caso "activo" en el Sistema VioGén, aplicando las medidas policiales de protección correspondientes al nivel "no apreciado" cumpliendo las medidas judiciales dictadas.

3.5. Cuando de la evaluación del riesgo resulten medidas policiales de protección que sobrepasen la capacidad de decisión operativa del evaluador, éste dispondrá la comunicación inmediata a quien tenga la facultad de asignar los medios humanos y materiales necesarios al efecto. Cuando la aplicación de las medidas policiales de protección corresponda a personal de Unidades o Plantillas diferentes de aquellas a las que pertenezcan quienes efectuaron la valoración, se les comunicará o trasladarán de inmediato todos los datos o documentos que se estimen necesarios.

4. SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCION DEL NIVEL DE RIESGO.

4.1. Para mantener actualizada la evaluación del riesgo, los agentes o unidades encargadas de la protección de las víctimas llevarán a cabo nuevas VPER, "con incidencia" o "periódicas", realizando, de ser necesario, nuevas entrevistas con la víctima y con personas de su entorno.

4.2. Si durante el seguimiento de un caso se producen incidencias, como nuevas agresiones u otros hechos supuestamente delictivos, o se tiene conocimiento de cambios significativos en las circunstancias y/o conducta de la víctima o del agresor que tengan relación con los factores de riesgo, se cumplimentará de inmediato una nueva VPER "con incidencia", adoptando como nivel de riesgo el resultante de la evaluación más reciente. También se realizarán nuevas VPER "con incidencia" a solicitud de la Autoridad Judicial o del Ministerio Fiscal.

4.3. Si el caso evoluciona sin incidentes, se realizarán las siguientes valoraciones "periódicas":

Nivel "extremo", antes de las setenta y dos horas. Nivel "alto", antes de los siete días. Nivel "medio", antes de los treinta días. Nivel "bajo",

antes de los sesenta días. Nivel "no apreciado" con Orden de Protección en vigor: antes de los sesenta días.

4.4. El resultado de esta nueva valoración se hará constar documentalmente de forma similar a la que se recoge en el apartado 3.4.

4.5. Cuando se estime, a través de los formularios de valoración y de evolución, que han desaparecido o que han remitido las circunstancias que ponían en riesgo a la víctima (nivel de "riesgo no apreciado"), se comunicará a la Autoridad Judicial, informando sobre los factores determinantes de tal valoración, pasando el caso a estar "inactivo" en el Sistema Vio Gen, cuando no resulte de aplicación una medida cautelar de protección en vigor.

4.6. Si una víctima que ya se encuentra en el Sistema VioGen en situación de caso "inactivo" presenta una nueva denuncia contra el mismo agresor o una nueva resolución judicial, se reactivará el citado caso. Como consecuencia, será obligatorio cumplimentar una nueva VPER.

4.7. Si una víctima que ya se encuentra en el Sistema VioGen, en cualquier situación, presenta una denuncia contra un nuevo agresor, se activará un nuevo caso, cumplimentando un nuevo formulario VPR.